

Julio 16 de 1940

16ª REUNION — Continuación de la 12ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **MATIAS G. SANCHEZ SORONDO**,  
Vicepresidente del Senado

**Senadores presentes:** Alberto Arancibia Rodríguez, Ricardo Caballero, Juan Cepeda, Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Jorge J. Pinto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, José P. Tamborini.

**Senadores ausentes, con aviso:** Atanasio Eguiguren, Manuel García Fernández, Robustiano Patrón Costas, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

**Senadores ausentes:** Mario Arenas, Herminio Arrieta, Aldo Cantoni, Juan B. Castro, Raúl Ceballos Reyes, Juan José Iubary.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicación de la Cámara de Diputados.

II.—Peticiones.

2.—Licencia.

3.—Proyecto de ley del senador Serrey, acordando pensión a la señora Micaela González de Iramain.

4.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, en el proyecto de ley, en revisión, sobre colonización. Queda pendiente.

—En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de julio de 1940, siendo la hora 16 y 20, dice el

**Sr. Presidente** (Sánchez Sorondo). — Continúa la sesión.

1

ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente** (Sánchez Sorondo). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicación de la Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN:

Declarando obligatoria la vacunación y revacunación antidiftérica en todo el territorio de la Nación. (A la Comisión de Higiene y Asistencia Social.)

II

Peticiones

La Confederación Femenina Argentina de la Paz, reitera su solicitud de sanción de una ley que esta-

Julio 16 de 1940

CAMARA DE SENADORES

16ª Reun. Cont. de la 12ª Sesión Ord.

blezca la versión real del Himno Nacional. (A sus antecedentes.)

—El Centro de Comisionistas y Representantes, de Tucumán, solicita la sanción del proyecto de ley, en revisión, sobre régimen legal de los viajeros de comercio. (A sus antecedentes.)

—Ana Piedracueva de Giménez y Juan López Vicencio, solicitan pensión civil. (A la Comisión de Peticiones.)

—María Irene Sosa solicita pensión militar. (A la Comisión de Guerra y Marina.)

## 2

## LICENCIA

—Se lee:

Buenos Aires, julio 15 de 1940.

*Señor presidente del Senado de la Nación.*

Capítulo Federal.

Solicito permiso para faltar a las sesiones de la presente semana.

Salúdalo muy atentamente.

*Atanasio Eguiguren.*

**Sr. Presidente (Sánchez Sorondo).** — Como es de práctica, se va a tratar sobre tablas la licencia solicitada por el señor senador por Entre Ríos.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se vota si se concede con goce de dieta, y resulta, igualmente, afirmativa.

## 3

**PENSION A LA SEÑORA MICAELA GONZALEZ DE IRAMAIN. — PROYECTO DE LEY DEL SENADOR SERREY.**

—Se lee:

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Acuérdate a la señora Micaela González de Iramain, como hija viuda del ex diputado doctor Nicolás González, la pensión mensual de trescientos pesos moneda nacional (\$ 300 m/n.) por el término de diez años.

Art. 2º — Mientras este gasto no se incluya en la ley general de presupuesto, se hará de rentas generales con imputación a la presente.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

*Carlos Serrey.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Entre los buenos servidores del país que contribuyeron con su esfuerzo a la obra de consolidación de las instituciones nacionales, figura el doctor Nicolás González. Nacido en La Rioja, tuvo actuación en su provincia natal y en la de Santiago del Estero, desempeñando en ambas altas funciones de orden judicial. Se destacó en la enseñanza y culminó su actuación pública ocupando una banca por dos veces en la Cámara de Diputados, donde dejó hondas huellas de su talento y su carácter. Fué también en su provincia el líder de la agrupación política a que pertenecía —el Partido Autonomista Nacional—, que supo dar al país tan esclarecidos servidores. La continua preocupación por los intereses generales lo llevó a abandonar los suyos particulares, de modo que dejó como única herencia a sus hijos su nombre y su ejemplo. Entre aquéllos figura la señora Micaela González de Iramain, para la cual vengo a solicitar un acto de justicia del Congreso, en que tan buenos servicios prestara su progenitor. Viuda y sin bienes de fortuna, única de los descendientes del doctor González que se encuentra en situación de ocurrir al amparo de los poderes públicos, no dudo encontraré en mis honorables colegas el apoyo necesario para que sin mayor tardanza se convierta en ley un proyecto fundado en razones tan evidentes.

*Carlos Serrey.*

—A la Comisión de Peticiones.

## 4

## COLONIZACION

**Sr. Presidente (Sánchez Sorondo).** — Al orden del día. Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Palacios.** — En la sesión anterior afirmé que no podría cumplirse el plan agrario que se proyectó en el despacho, pero que de todas maneras serviría para iniciar la labor, orientando las actividades futuras.

Sostuve que debíamos adoptar diversas formas de colonización, de perspectivas distintas. Además de las ofrecidas por el despacho, propuse la enfiteusis que garantiza la estabilidad del colono.

Las tierras rurales del Estado se dividirían en fracciones adecuadas a la ocupación de una familia, y se harían concesiones vitalicias e intransferibles de canon movable, rescindibles por los concesionarios, en cualquier momento. Y así se conservaría y acrecentaría el dominio privado de la Nación.

Al pasar a cuarto intermedio, expresaba que las leyes de tierras, mal aplicadas, habían conducido al acrecentamiento del latifundio, como he de probarlo.

La segunda ley orgánica de tierras es de 1876. La primera fué la enfiteusis. Autorizaba la ven-

ta, en lotes, hasta 80.000 hectáreas a una sola persona, sin prohibir el traspaso de los títulos provisionales, lo que permitía el acaparamiento.

Esta ley fué obra de Avellaneda. El ilustre tucumano que tanto se había ocupado de la tierra pública parecía el más indicado para poner orden. Desgraciadamente, la aplicación de la ley fué desastrosa, como la de todas las que le siguieron.

La ley de 1878 autorizó como recurso para efectuar la expedición a Río Negro, la venta de miles de leguas de tierras de las que iban a conquistarse, a razón de 400 pesos por legua, sin establecer límite en la adquisición, y estableció premios en tierras a los que precisamente carecían de capacidad para trabajar y colonizar, lo que determinó el acaparamiento por los especuladores, que compraron a precios ínfimos los certificados de premio y dejaron sin trabajar las tierras, que adquirirían valor por el esfuerzo común, por la acción natural del progreso.

Y así, el latifundio se extendió, produciendo males incalculables.

La ley de 1903 fué, según lo afirma con razón Damián Torino, autor de un gran libro sobre inmigración, un grito de alerta dado a destiempo para prevenir un mal que ya se había ensañado, con éxito, sobre las mejores y más vitales partes de nuestro organismo económico. En esa ley se proscribió el latifundio y se dispone el fraccionamiento de la tierra para su aprovechamiento por el colono.

Pero es evidente, como dice Torino, que ya era tarde, pues la Nación se había despojado de sus mejores tierras, conservando sólo las inferiores que por razones de clima, latitud, falta de agua, aislamiento de los puertos, escasez de lluvias, etcétera, oponen obstáculos muy serios a su dominio y aprovechamiento por la colonización. En su gran mayoría, tales tierras no son adecuadas para la implantación de la pequeña propiedad; en general, no son aptas para la agricultura y son mediocres para la ganadería. No será ahí posible la chacra, de limitada extensión, en la que se obtendría producción agrícola perfeccionada y económica, con variedad de productos y subproductos de granjas, la rotación racional y sistematizada de los cultivos, la plantación de árboles frutales y la ganadería intensiva, con forraje y grano, cosechados en la chacra.

No hemos atribuido ninguna importancia a la subdivisión del suelo, a su apropiación y cultivo por la familia rural, porque ignorábamos, en medio de nuestras luchas intestinas, que sólo ella podía crear una democracia orgánica.

Las leyes de tierras han sido desnaturalizadas entre nosotros. En realidad la ley es sólo un instrumento que en manos inexpertas o rapaces resulta funesta.

Son nuestros hombres, nuestras clases dirigentes, los culpables del desbarajuste y el despilfarro. Esa ley de 1903, la ley número 4.167 se proponía radicar con el aumento de la población, el progreso económico en los territorios nacionales.

Pero como lo hace notar el señor Domingo Buonocore, en su conferencia de la Facultad de Química, haciéndome el honor de citar mi opinión, diversos decretos reglamentarios, han ido incorporando al régimen de la ley, dificultades y limitaciones que contrarían su espíritu y conspiran contra su finalidad pobladora, creando verdaderos señores feudales en la Patagonia. Se ha manejado la tierra como una mercancía, sin observar su aspecto social y moral. Invocando el derecho que reconoce el artículo 99 de la ley número 4.167 al arrendatario, de comprar hasta la mitad de la tierra arrendada, grandes compañías anónimas extranjeras, mediante simulados arrendatarios se han adueñado dolosamente del Sur argentino.

El escritor citado, que ratifica mis denuncias hechas ante el Senado, afirma que el 92 % de los lotes salidos del dominio fiscal en los territorios de Santa Cruz y Tierra del Fuego, están en poder de compañías alemanas e inglesas.

En el viaje que realicé hace pocos meses y durante el cual obtuve los datos utilizados para mi proyecto de colonización oficial para una región de la Patagonia, me preocupó seriamente averiguar en manos de quiénes se encuentran las tierras. Puedo asegurar, después de lo que he visto y de las informaciones obtenidas, que la mayor parte, más del 70 % de los mejores valles andinos, es de propiedad de compañías extranjeras, particularmente inglesas y alemanas, que bajo distintos nombres, constituyendo en definitiva una sola explotación comercial, con directores comunes, se han apropiado de todos los mejores campos, constituyendo latifundios enormes, de leguas y leguas, que se extienden a lo largo de la cordillera.

Puedo citar el caso de la Compañía de Tierras Sudargentina, que abarca las siguientes estancias: Maquinchao, 85 leguas; Pilcaniyeu, 25; Maitén, aproximadamente 70; Lelque 100. Esta misma compañía tiene explotación comercial común, con la estancia Alicura en Neuquén y la Compañía de Tierras Tecka, en Chubut. Además, tiene intereses comunes con la Compañía Gente Grande, de capitales extranjeros.

Julio 16 de 1940

CAMARA DE SENADORES

16ª Reun. Cont. de la 12ª Sesión Ord.

De los 136 kilómetros del camino, que arranca de Maitén y va a Esquel por la ruta 40, de la red nacional de vialidad, 110, se extienden a través de la estancia Leleque de la mencionada compañía.

Desde Esquel al Sur, las estancias inglesas se alternan con las alemanas o las de propiedades de la Sociedad Anónima Exportadora e Importadora de la Patagonia, de los señores Menéndez, que poseen también grandes latifundios en nuestro país y en Chile. Es interesante hacer notar que en Chile, casi toda la zona conocida por Aisen pertenece a una sola compañía extranjera.

Fuera de todos estos campos, verdaderamente ricos, gran parte del territorio patagónico, de tierras pobres, se encuentra en manos de muchos pequeños productores que se han afincado en ellos, luchando con enormes dificultades para sacar algún provecho.

En su inmensa mayoría, no han obtenido aún el título de propiedad de las tierras que ocupan desde hace decenas de años. En cambio, las compañías inglesas y alemanas tienen títulos en regla, de la mayor parte de sus posesiones. Es necesario hacer notar, que mientras el poblador argentino lucha con toda suerte de adversidades, desamparado de los poderes públicos, estas grandes compañías latifundistas, gozan de todas las ventajas y consideraciones, no obstante descuidar del valor humano. Los peones de sus estancias tienen una retribución mezquina, de treinta pesos mensuales, y viven en galpones sucios, malolientes, fríos y húmedos, donde arrojan unos cueros para dormir.

Esto lo he observado en varios establecimientos ingleses y alemanes, en uno de los cuales, el ex ministro de Agricultura doctor Cárcano, durante su jira por la Patagonia, expresó su desagrado por la situación miserable de los trabajadores argentinos.

El suelo de nuestros territorios nacionales entregado a los extranjeros traerá consecuencias fatales. A este respecto es interesante el hecho que me refiere el ex presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor Luis Roque Gondra, en carta que me dirige con fecha 26 de junio de este año: «El profesor Próspero G. Alemandri, inspector general de escuelas de territorios nacionales, funcionario probo y diligente, hoy vocal de aquel consejo, me informó, dice el doctor Gondra, que en algunas escuelas alemanas de las colonias El Dorado y otras, situadas en el territorio de Misiones, junto a la línea fronteriza con Brasil, daban enseñanza exclusivamente alemana a numerosos niños argen-

tinios, hijos de alemanes residentes en ese territorio y en regiones limítrofes de Brasil, que cruzaban la frontera a pocos pasos, y concurrían a ellas. Con tal motivo, me informó entonces el inspector general Alemandri, que un señor Schwelm, empresario administrador de las colonias y escuelas referidas llegó a decirle «¿Cómo puedo yo imponer a los niños (los niños eran argentinos nativos) el suplicio de hablar en castellano?»

¡Mayor desprecio por nuestro país es inconcebible!

De ahí que vea complacido el artículo 77 del despacho, que acaso llegue tarde y que dispone: 1º: que en los títulos de propiedad que otorgue el Estado deberá insertarse una cláusula especial en la que se establezca que las tierras que enajene no podrán formar parte del patrimonio de sociedades anónimas o de sociedades comerciales, con excepción de las cooperativas; 2º: que los registros de la propiedad, no anotaran transferencias de tierras de origen fiscal a favor de las mismas.

Todas las leyes de tierras han fracasado y de ahí que el colono no se haya arraigado al suelo. Y no hemos podido disminuir las estancias latifundios, que cumplieron su misión, aumentando el número de chacras, las unidades agrícolas que comprenden la producción vegetal y animal, producciones complementarias que deben hacerse a la vez.

Nuestras leyes de tierras mal aplicadas han permitido la expansión del latifundio que destruye el vigor de los pueblos en vez de facilitar la colonización, que fué el pensamiento inspirador.

Concesiones de complacencia y ardides de mala ley han enfeudado inmensas zonas de tierra, impidiendo el arraigo del colono a los campos y así se ha podido afirmar en verdad, que con el latifundio desierto se reproduce en nuestro país el mal histórico del baldío español y con el latifundio cultivado, bajo el régimen tiránico del arriendo, se empieza a irlandizar nuestra campaña.

El latifundio fué una necesidad en los comienzos de nuestra vida económica y no hubiera sido justo combatirlo en esa época. El propietario de la vasta extensión puso su esfuerzo para defender el suelo y fué avanzada de la civilización que arrancaba la tierra al desierto. Pero resulta absurda su permanencia. El desenvolvimiento de las fuerzas económicas en la era institucional, exigía perfeccionar el régimen de la propiedad para adaptar a las nuevas necesidades del trabajo la producción agropecuaria.

Todo anunciaba una transformación, a la que se ha referido Damián Torino en su libro citado, y que yo he estudiado en mi obra *El nuevo derecho*. Se iniciaba el período agrícola a impulso de la inmigración; comenzó la construcción de los primeros ferrocarriles como auxiliares de la agricultura; las comunicaciones interoceánicas vinieron a ser cada día más fáciles y de mayor comodidad, haciendo posible y remunerados el intercambio de productos; y esto determinó una apreciable valorización de la propiedad raíz que estuviera en condiciones de explotarse.

Si a todo eso hubiese seguido una distribución racional de la tierra apta, de propiedad del fisco nacional y provincial, tendríamos una población muy superior a la actual y habríamos acumulado una riqueza mayor.

Nuestro campo se habría poblado con la aplicación honesta de una ley de colonización y con la implantación del sistema del impuesto progresivo a la tierra, y del impuesto al mayor valor que debía regir antes de efectuar expropiaciones para entregar la tierra al productor.

Y eso hubiera sido más fácil entonces que ahora. Tal sistema impositivo favorecería la división de la tierra, porque el propietario abandonar su actitud pasiva, en espera del mayor valor; atenuaría la especulación, el viejo enemigo de la pequeña propiedad rural que ha triunfado de las leyes agrarias, que contribuye a detener la población y que preparaba grandes convulsiones para el futuro; regularizaría las fluctuaciones del valor y propendería a que la tierra fuera entregada al trabajo.

El miembro informante en la Cámara de Diputados, expresó que este asunto del régimen impositivo plantea un problema grave, que tendrá que abordarse y resolverse por una ley especial.

No creo que sea imposible tratarlo conjuntamente con la ley de colonización y acaso convendría, máxime cuando está en la conciencia de todos los legisladores, que urge un sistema fiscal que permita al Estado apoderarse en relativa proporción del aumento del precio del suelo, facilitando la adquisición de la tierra a los que quieran trabajarla. Se trataría de tomar una parte de los valores producidos por el trabajo de la sociedad.

El proyecto del Ejecutivo tiene como propósito fundamental dividir el latifundio. ¿Podrá cumplirse? Por lo pronto se parte de un nuevo concepto de la propiedad del suelo. Ya no se trata de la tierra considerada sólo como artículo de comercio. Se ha hablado de su función

social que ha sido tema doctrinario durante mucho tiempo. Me he ocupado en otras oportunidades, teóricamente, de este asunto. No creo que sea necesario referirme ahora, sino muy al pesar, a la disposición consignada en el despacho de la comisión que dice: «La propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo».

El artículo 2.513 del Código Civil, va más allá de la misma legislación romana. Dice: «Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de disponer o servirse de ella, de usarla y gozarla, según la voluntad del propietario. El puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla...», etcétera.

El codificador en la nota sostiene que los excesos en el ejercicio del dominio son la consecuencia inevitable del derecho absoluto de propiedad; que la palabra *abutendi* de los romanos, que siempre se ha considerado como sinónima de destruir en la frase *Jus utendi et abutendi*, expresa, solamente, la idea de la disposición y no de la destrucción de la cosa. Y agrega: «Pero es preciso reconocer que siendo la propiedad absoluta, confiere el derecho de *destruir la cosa*.»

Se ha sostenido, por eso, que la ley romana, en este punto tenía un carácter más social que la nuestra. Ihering dice que la propiedad, en Roma, no se extendía más allá de su «uso normal» y no encontró el amparo del Estado, cuando pasaba ese límite.

Y en su libro *Espíritu del derecho romano* se ocupa, luminosamente, del carácter histórico de los principios fundamentales del derecho antiguo, así como de su variabilidad.

El tiempo modifica los principios fundamentales igual que cambia las reglas del derecho. Los principios no son categorías lógicas, sino la concentración de reglas, y las reglas cambian con las relaciones.

Por eso, sostener la inmutabilidad de los principios jurídicos antiguos demuestra falta de sentido crítico para el estudio de la historia.

No obstante se aceptan como de buena ley, principios que el romanista se ha acostumbrado a considerar como verdades absolutas, como el principio de la propiedad romana.

En la página 344 del libro que he citado, Ihering dice: «Trendelenburg sostiene que del principio de la propiedad resulta un derecho ilimitado sobre la cosa que está en propiedad, cualquiera que sea la mano en que se encuentre». Y agrega: «Esto no es, por otra parte, más

que uno de esos prejuicios que han pasado como axioma entre los romanistas».

Un profesor de derecho romano en nuestra universidad, el doctor Helguera, afirma que en esta materia, el derecho romano ha dado soluciones por las cuales se brega en la actualidad y a las que aun no ha llegado nuestro derecho positivo. El interés social todavía no ha vencido al individual del propietario y la función económica de la propiedad no se ha impuesto en la legislación. Sin embargo, en Roma, se tenía un claro concepto de la misma y en ella se inspiran diversas disposiciones tendentes a obligar al propietario a que haga que su propiedad responda a esos fines, llegando hasta a privarlo de ella y condenarlo a sanciones penales cuando los contraría.

«Si alguno descuidaba el cuidado de su campo, dice Aulio Gelio en *Noches áticas*, IV, XII, lo dejaba en mal estado, no labrándolo ni abonándolo, ni cuidaba de sus árboles ni de sus viñedos, en otro tiempo cometía delito castigado por la ley. La represión estaba encargada a los censores, que privaban a los culpables del derecho de sufragio.»

**Sr. Caballero.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Palacios.** — Con mucho gusto.

**Sr. Caballero.** — Las observaciones de Aulio Gelio se refieren a la época del imperio. Efectivamente, el imperio en Roma trajo la idea de la función social.

**Sr. Palacios.** — Está equivocado el señor senador; Aulio Gelio, dice: «Se castigaba por la ley, en otro tiempo...» Se refiere a la época en que se produce la transformación de ese principio que el señor senador concibe como absoluto. Es un error lamentable hablar de Roma en términos generales. Roma, desde su comienzo hasta su decadencia, ha pasado por un proceso muy largo en el cual ha habido distintos regímenes políticos y jurídicos.

**Sr. Caballero.** — Yo me refería a la época en que él escribió.

**Sr. Palacios.** — Además de eso, verá el señor senador el error en que incurría cuando hacía afirmaciones tan exageradas como las que hizo en la sesión anterior.

La propiedad es una institución social creada por la sociedad y para la sociedad; por eso la ley puede regularla y orientarla.

De ahí, que aplauda el proyecto que incorpora a nuestra legislación el concepto social de la tierra, con el que se contribuirá a vincular el productor al suelo.

El ex ministro de Agricultura, autor de este proyecto, noble espíritu cuya gestión pública esforzada y honesta he aplaudido en diversas oportunidades, ha dicho que el derecho a la propiedad de la tierra no es ilimitado y no lo es por la misma función que desempeña; que el propietario no puede dejarla impunemente inculta o sin trabajar, en un medio productor, sin entregar a la colectividad —digamos a la Nación, unidad política, económica y moral, cuyo interés es la suma de los intereses de los hombres que la integran y cuya fuerza radica en la conciencia moral de cada uno de ellos— lo que la colectividad no recibe por la determinación tomada; y agrega: Además, no debe tener afán en retenerla, ya que el mayor valor que la tierra pudiera adquirir por hechos extraños a su capacidad de producción, no le pertenece, por no ser un producto de su esfuerzo sino consecuencia de la acción social del medio en que actúa. De no trabajarla, o de no permitir que se trabaje, el interés individual indica al propietario la conveniencia de deshacerse de ella, y el interés social al recogerla, encuentra alguien que dándole lo que le falta —trabajo— la convierte en productor. No veamos en todo esto una tendencia confiscatoria, dice, porque sólo significa una trasmutación de valores y un reajuste de posiciones, para llegar al equilibrio social y económico, coordinando los derechos y los deberes que la posesión de la propiedad impone, procurando que la plusvalía que pudiera suscitar, extraña al esfuerzo personal, aisladamente considerado, vaya hacia quienes contribuyeron a formarla, que es la sociedad.

No puede aceptarse que se dé a la tierra la característica de una mercancía sujeta a la oferta y la demanda, pues siendo una base cierta el bienestar individual, con trascendencia colectiva, realiza una función social.

Me imagino la sorpresa del ex ministro Padilla cuando lea las palabras del senador Caballero, para quien el concepto de la función social de la propiedad es comunista y la agitó Lenin, antes que nadie.

Estaba ya, señor presidente, en la legislación romana.

El que levantaba una construcción en una finca cuyo edificio estaba derruido y abandonado por su propietario, de acuerdo a un rescripto de Adriano, se convertía en propietario del terreno. Es decir, que si el propietario no hacía cumplir su función social a la propiedad, el derecho dejaba de ampararlo.

El concepto es viejo, como se ve, y en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en 1911, lo

estudió y sistematizó León Duguit, profesor en la Universidad de Burdeos. El propietario, para él, tiene una función social que cumplir. Mientras cumpla esta misión, sus actos de propietario están protegidos. Si no la cumple o la cumple mal; si, por ejemplo, no cultiva su tierra, o deja arruinar su casa, la intervención de los gobernantes es legítima para obligarlo a cumplir su función social de propietario, que consiste en asegurar el empleo de las riquezas que posee, conforme a su destino.

Y el Código Social de Malinas, creación del cardenal Mercier, expresa que, en el caso de dominios incultos o sometidos a métodos de cultivos inferiores o de explotaciones técnicas que provocan el desarrollo de un proletariado rural miserable que abandona el campo, el Estado tiene derecho a decretar el desmembramiento de los cultivos y hasta de las propiedades.

De manera que, como ven los señores senadores, todo esto no es una novedad, ni el señor Lenin tiene nada que ver con la función social de la propiedad. Yo no me imagino al señor senador Landaburu del brazo de Lenin.

**Sr. Caballero.** — No ha sido esa mi intención, sino demostrar que en ciertos momentos, las doctrinas que se llaman extremistas y ambos lados, derecha e izquierda, se juntan. Y eso es lo que pasa aquí.

**Sr. Palacios.** — Le acabo de demostrar que no es posible pretender que el que aritó por primera vez el concepto de la función social fué Lenin, cuando, entre nosotros, el ingeniero Padilla lo defendió, y el Código de Malinas lo sostiene. Por otra parte, nuestra legislación y nuestra Corte Suprema lo han reconocido.

**Sr. Caballero.** — Fué Lenin el primero que puso en práctica la idea de la función social de la tierra.

**Sr. Palacios.** — Hay que reemplazar, señor presidente, el régimen agrícola de carácter comercial y extensivo, con un régimen que consagre el concepto social de la tierra. Para eso, es claro que hay que entregar la tierra sin hacer negocio al que la trabaje, sacándola, cuando sea necesario, al que la abandonara o no le hace cumplir su función social.

Alejandro Bunge, cuya preparación es conocida de los señores senadores, ocupándose del concepto social de la tierra, se formula esta pregunta: «¿Cree algún banquero colonizador, sinceramente, que pueda ahora una familia de agricultores, pagar la tierra con intereses de 6 % al año sobre el valor venal y 5 ó 10 % de amortización?». Y se contesta: «Todos sabemos que no, si ello ha de salir de los excedentes por

arriba de lo que requieren para vivir dignamente dentro de nuestro grado de cultura».

Son interesantes las consideraciones de nuestro eminente compatriota. Cree que la pequeña parcela debe entregarse al agricultor para cultivarla sin carácter comercial.

El agricultor pagará produciendo, consumiendo y cambiando sus productos con los que otros producen; pagará con el tráfico que él origina, con la alicuota de su producción que cambia por servicios de todas las otras profesiones, con el producido de los impuestos que esa vida y ese tráfico comercial proporcionan al erario, con el amor a esa tierra, con la formación de sus hijos, con su amor al país y su respeto a las instituciones.

Como el Estado no es dueño de la tierra necesaria, debe adquirirla. Y habrá de poderlo hacer en la medida y en las condiciones en que ha de darla y dentro de nuestras normas constitucionales. La palabra «darla», no tiene en este caso un sentido absolutamente literal. Hasta ahora vender la tierra implica un concepto comercial, pero venderla al 2 % de interés y 1 % de amortización es prácticamente darla. Por otra parte, quien la adquiere en tales condiciones puede aceptar limitaciones contractuales al derecho de propiedad, como la prohibición de dedicar toda la superficie a un solo cultivo, o de dedicarla al que no resultare adecuado a las conveniencias de la región y del país, etcétera.

Bunge, cree que dada la magnitud que debe tener la empresa, no parecería justo ni lógico, ni siquiera posible, que el Estado hubiera de realizarla, comprando tierra o expropiándola por su valor venal. Quinientas mil hectáreas al año, a doscientos pesos la hectárea, representarían, cien millones de pesos, de los cuales el Estado y la colectividad habrían de costear en ese caso, más de la mitad, y otro tanto para proveer de habitación y de implementos a esas parcelas agrícolas.

El valor atribuido a la tierra es un valor venal que en su conjunto no guarda relación con el de la producción efectiva. Ese es un hecho que contribuye a definir lo que Bunge llama «el latifundio social». Uno de los métodos que sugiere es el del impuesto progresivo al latifundio social que por ser muy frecuente en nuestro país, ofrece un punto equitativo de apoyo para la solución del problema.

Para explicar lo que se entiende por latifundio social, Bunge dice que es evidente que dentro de nuestra actual economía una estancia de 1.000 a 2.000 hectáreas de suelo fértil, a varias

leguas de una estación ferroviaria no es un latifundio ni mucho menos. Su dueño no es un latifundista. Pero si poseyera diez o veinte de esas estancias, sería dueño de un «latifundio social», sin poseer un «latifundio geográfico».

Y así no se trataría de vender a plazos lotes de tierra a pequeños capitalistas, sino de entregar a la familia agricultora, un hogar agrícola completo con casa, muebles, agua, arado, rastra, caballo de labor y semilla.

Dentro del concepto social de la tierra, podría admitirse una reforma que yo conceptúo de importancia.

El despacho dispone que la venta del predio al agricultor se hará pagando éste por lo menos el 10 % del precio de venta, al contado, siempre que no sea propietario de inmuebles aptos para la agricultura de igual o mayor extensión que el que pretenda adquirir, y que el saldo del precio de venta será abonado: a) Con una amortización anual acumulativa del ½ % e interés del 2 ½ % hasta reducirlo al 50 %. b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que están en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante. Además, dispone que los agricultores que reúnan los requisitos exigidos, pero que no estén en condiciones de abonar el 10 % del precio de venta al contado, podrán arrendar los predios con opción de compra a un precio igual al 3 % del precio de venta.

No obstante reconocer que las condiciones de pago son modestas, considero que debería admitirse, cuando los agricultores carecen del importe del 10 % del precio de venta, que abonaran con un tanto por ciento del producto de las cosechas. En esa forma podrían ser agricultores los que con aptitudes probadas no tienen otro capital que su trabajo.

Hacer propietarios a los que ya tienen un pequeño capital, es sin duda, importante, pero interesa fundamentalmente al país llevar a la tierra y arraigar a los agricultores que no pueden formar familia porque viven explotados.

Se ha sostenido, con razón, que con la entrega de un tanto por ciento de la producción de la tierra, el pago total de la propiedad se cubriría más rápidamente que con amortizaciones fijas en dinero, por el sobante que dejarían los años buenos sobre las amortizaciones calculadas. Y el agricultor se hallaría en cuanto a obligaciones, en las mismas condiciones en que trabaja actualmente como arrendatario, pero sin perspectivas, ahora, de hacerse propietario.

Esta medida haría desaparecer en el presunto comprador la condición de arrendatario, pues

probablemente al vender los productos de la primera cosecha dispondría de la cuota del 10 % exigido, para considerarlo como comprador. ¿Cómo se vendería la tierra a los campesinos de La Rioja y Catamarca?

El senador Laurencena presentó el 24 de septiembre de 1936 un proyecto que establecía: 1º La entrega de la tierra al colono se hace con un contrato de arrendamiento, al que se anexa una promesa de venta que se hará efectiva si el concesionario cumple las condiciones estipuladas en aquél. 2º Tanto en el arrendamiento como en la venta se substituye el pago de una cuota anual en dinero, como se ha practicado y proyectado hasta ahora, por un porcentaje de la producción de la misma tierra.

Una iniciativa colonizadora racionalmente implantada tiene que partir de este principio enunciado por el senador Laurencena; la tierra convenientemente trabajada debe pagar el valor de la tierra. El Estado debe colonizar con hombres aptos que carezcan de rentas. El comprador ha de consagrar al trabajo de la tierra adquirida, su actividad total y la de su familia. Y el Estado no debe contar sino con el producido de la tierra para asegurarse el cobro de los intereses y la amortización del valor de la tierra. Por eso no estoy de acuerdo con el senador Laurencena, en que sea condición esencial del contrato que el colono posea máquinas, herramientas y animales exigidos por la explotación a que se va a dedicar. Creo que es preferible que tenga los elementos de trabajo, pues si se establecen como condición indispensable en ciertos lugares, sería imposible la colonización. El Consejo Agrario deberá otorgar créditos.

**Sr. Laurencena.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

La razón de exigirse al aspirante a la tierra que posea, por lo menos, los elementos de trabajo, es que si no se exige eso en la ley, hay que crear, entonces, el régimen de los préstamos de habilitación.

**Sr. Palacios.** — Habrá que crearlos, entonces.

**Sr. Laurencena.** — Muy bien, pero ése es otro sistema distinto al que yo proyecté y al que proyecta el señor senador.

**Sr. Palacios.** — Pero exigiendo máquinas y herramientas, se dificulta la colonización.

**Sr. Laurencena.** — Si accedemos a lo que manifiesta el señor senador, habría que estudiar la forma de realizar los préstamos de habilitación y dar los recursos necesarios para eso, los que por cierto, serían ingentes.



**Sr. Palacios.** — El Consejo Agrario tiene recursos, y yo voy a proponer otros más.

De acuerdo con el concepto social de la propiedad, es indudable que debe aceptarse un régimen jurídico que no concilia con el concepto mercantil. La tierra, es un instrumento de trabajo indispensable. Y los trabajadores de la tierra, autónomos, forjarán la grandeza del país, suprimiendo el desierto y afianzando la familia.

Subdividir la tierra y entregarla al labriego, no basta. Es necesario que el Estado evite el acaparamiento y la especulación.

Y para ello es indispensable, a mi juicio, dentro de un nuevo régimen jurídico, que se incorpore al despacho un artículo que diga: «Toda venta, enajenación, gravamen o subdivisión debe hacerse con la autorización previa del Consejo Agrario Nacional». Disposición previsor, que aparecía en el anteproyecto firmado por el diputado Bernardino Horne, cuya consagración al estudio de las cuestiones agrarias, es conocida.

Así se evitaría el peligro a que se refiere el artículo 16 del despacho.

El artículo 66 plantea, a mi juicio, una cuestión fundamental. Dice: «El Consejo Agrario Nacional podrá, en las tierras de que disponga, concertar con empresas o compañías capacitadas, la explotación temporal de bosques, sujetas a las condiciones y formas que determinen los casos en que la tierra fuese necesaria a los fines de esta ley».

Afirmo que este artículo debe suprimirse.

Hay que conservar los bosques existentes, y por eso sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia, a destruir árboles, entregando la tierra a la colonización.

Lo que corresponde es dictar la ley de bosques.

En el viaje efectuado a La Rioja y Catamarca como miembro de la Comisión Especial de Estudio de la Situación Económica y Financiera de las Provincias del Norte, he tenido ocasión de observar cómo la destrucción de los bosques, ha sido fatal en esas regiones.

El problema del árbol y del agua son conexos. Cuando no se habían destruido los bosques, las precipitaciones pluviales eran mayores y pacían en aquellas provincias muchos miles de animales más que ahora.

La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada. Se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos.

Los árboles regularizan las lluvias, evitan las precipitaciones excesivas y contribuyen a aten-

nuar las sequías, y es claro que esta acción es beneficiosa para la ganadería y agricultura. Impedir que se siga talando los bosques y realizar una tarea de intensa repoblación, contribuirá a modificar el régimen de las lluvias y ello será una obra patriótica.

Pedro Bazán, un eminente riojano, nos ha recordado la tala de bosques en la región de Los Llanos; árboles jóvenes de menos de diez centímetros de diámetro, algarrobos, quebrachos, eran cortados a cercén, para hacer tutores de viñedos y apilados llenaban las planchadas de las estaciones ferroviarias.

Desde el tren se observaba con dolor los terribles efectos de la tala. A los dos lados, sólo se veía un mar de jarillas ondulantes. Ni un árbol. Los árboles habían desaparecido y ya no llovía en la región. Arrasar los árboles es provocar la sequía.

La tierra queda yerma; se van las aves y también los hombres.

El diputado Martínez se opuso con competencia al artículo del despacho. El miembro informante, doctor Palacio, expresó que, sin duda, una vez que se dictara la ley proyectada por el diputado Martínez, se dejaría sin efecto la facultad que por el despacho en discusión, se otorgaba al Consejo Agrario.

Naturalmente el diputado Martínez tenía razón. Zonas para colonizar hay muchas. Por eso es peligroso echar mano de los pocos bosques que existen y no sabemos cuándo se sancionará la ley que los defienda. Y no debe haber Consejo Agrario ni ningún otro, autorizado, para cortar un árbol, sin que intervengan oficinas técnicas, que sepan señalar en qué medida y hasta qué punto se puede realizar la tala de árboles. El Consejo Agrario dispondrá de toda la tierra fiscal boscosa. Y por eso, este artículo constituye un peligro.

La obra de colonización que ha de emprenderse en cumplimiento de la ley que se dicte, requiere muchos recursos. Yo propongo que a los ya establecidos por la ley, se agregue otro que resultará de las tierras, producto del impuesto a las herencias.

Voy a explicarme. Se trataría de disponer que el impuesto a las herencias u otras transmisiones de dominio de tierras fuera recaudado en especie, o sea en una fracción de tierra proporcional al impuesto establecido, cuando la transmisión consista en fincas mayores de quinientas hectáreas de tierra laborable o cinco mil de tierra sólo pastoril.

La tierra que adquiriera así el Estado, se subdividiría en fracciones de chacra o granja y se

concedería, por vida, en su subasta pública, a los mejores postores de su canon. Se obtendrían ingresos con los cánones y su sucesiva valorización y el incremento cada vez mayor que este renglón de las rentas públicas podría llegar a permitir la disminución de los impuestos.

La ley de impuesto a las sucesiones fué sancionada por mi iniciativa hace ya muchos años, con una tarifa progresiva muy moderada, pues el principal propósito que tuve fué el de establecer el principio de la progresividad en nuestro atrasado régimen tributario.

Sabía que el rendimiento de la contribución no estaba de acuerdo con el valor de las sucesiones. No faltó en el Congreso quien considerara confiscatorio mi proyecto, en el sector de los conservadores. Me sentí satisfecho cuando, después de muchos años, una comisión formada en su mayoría por conservadores, trajo espontáneamente al Senado la proposición de duplicar la tasa del impuesto, que yo formulé moderadamente.

La educación pública ha recibido y recibe con este impuesto, inevitable y de fácil recaudación, un aporte muy apreciable. Y yo desearía que ahora el gravamen beneficiara a la colonización. Esta proposición que formulo, ha sido sostenida antes por el escritor Villalobos Domínguez y por el doctor Rafael Emiliani.

El primero, en un libro muy interesante sobre *Apropiación social de la tierra*, sostiene que los herederos hallarían en el sistema propuesto la ventaja de no verse, en ciertos casos, obligados a la venta forzada de la finca ni a procurarse dinero para atender al pago del impuesto sucesorio. Se realizaría así un proceso de colonización interior sobre nuevas bases; las fincas serían entregadas a cultivadores autónomos, en relación directa con el Estado, como arrendatarios permanentes. La libre iniciativa y cálculo de cada uno de ellos adaptaría los cultivos a las circunstancias que su favorable situación legal y económica y las condiciones del lugar, fertilidad y época, les aconsejaran; y el Estado extraería de esa labor cuantiosos y crecientes recursos fiscales mediante la percepción de la renta correspondiente a cada parcela ocupada. Llegaría el Estado a una gran apropiación de la tierra del país, *sin haber despojado a nadie*, sin suscitar resistencia política especial por parte de los propietarios y presentando, en cambio, a las masas, hoy desposeídas de tierra, un programa claro y seductor de adquisición conveniente de la posesión vitalicia de una finca, sin el desembolso a que hoy se ve obligado para

compra de la tierra todo el que quiera obtener segura disponibilidad de ella.

Disminuiría la demanda para compra o arrendamiento de las tierras de propiedad privada, por cuanto los labradores se dirigirían con mucha preferencia a las que el Estado fuera poniendo a su disposición; y de aquí, un descenso general, de velocidad más o menos acentuada, en el valor rentístico y venal de las tierras de propiedad privada. La oferta de ellas, sería cada vez en condiciones relativamente más favorables para el ocupante o comprador.

El doctor Rafael Emiliani, en su libro *Reorganización económica, política y social*, sostiene que la tierra monopolizada tiraniza el trabajo rural en perjuicio de la economía general comprometiendo nuestra estabilidad.

El problema debe ser resuelto, según él, por un sistema que importe colocar al Estado en situación de ir retrotrayendo paulatinamente a su dominio la tierra. La tierra que el Estado adquiriera por esta reforma debería, según Emiliani, estar sometida a un régimen enfiteútico que daría la sensación y los efectos de la misma propiedad, por toda la vida del enfiteuta y hasta con derecho de sucesión por parte de sus herederos, pero con canon movable, en el tiempo y la región.

Nos pronunciamos, dice, por el sistema de la enfiteusis, porque sólo él puede asegurar las necesidades actuales y futuras de la sociedad, que gradualmente irá determinando la libertad económica del pueblo, conservando estabilizada la tierra como elemento de uso común para el trabajo de todos. El Estado adquirirá, paulatinamente, riqueza en tierra que se irá acrecentando por virtud del derecho de sucesión, suprimiendo al trabajador el capital necesario a su adquisición y permitiendo que por la comodidad del canon, pueda aumentar con su trabajo, recursos para adquirir tierra del mercado privado. Esta enfiteusis sería hasta con derechos sucesorios, reconociendo, además, libertad de transferirlo a condición de que sea a un trabajador directo.

Y si no se aceptara la enfiteusis, la tierra adquirida en la forma que propongo podría venderse en la misma forma que establece el despocho.

Pero lo lógico es admitir los dos sistemas.

Recapitulando propongo:

1º — Que además del régimen del dominio pleno, se ofrezca como forma de colonización de las tierras de propiedad de la Nación, la enfiteusis, con las modificaciones que se creyeran convenientes;

2º — Que se incorpore a la ley, el sistema del pago en especie, a objeto de que el colono pueda abonar el importe de la tierra, con un tanto por ciento del producto de la cosecha;

3º — Que para evitar el acaparamiento y la especulación, toda venta, enajenación, gravamen o subdivisión de la tierra adquirida por el agricultor, deberá hacerse con la autorización previa del Consejo Agrario Nacional;

4º — Que se suprima del despacho el artículo 66 en defensa de los bosques;

5º — Que vayan al fondo de colonización las tierras que deberán entregarse en pago del impuesto a las sucesiones.

No quiero abusar de la atención de los señores senadores. Termino, expresando que no obstante conceptuar este proyecto como deficiente, lo votaré, porque él inicia una obra que si se realiza con seriedad, podrá ser de beneficiosos resultados.

Nuestro país continúa siendo un desierto y el latifundio determina la situación precaria y angustiosa del trabajador del campo. Así no puede consolidarse una democracia. Es menester garantizar al agricultor argentino la estabilidad en el suelo, lo cual supone la creación de la granja, facilitada por el Estado en virtud de un concepto social y no mercantil de la tierra.

Y así acercaremos a los hombres, los vincularemos con un sentimiento de solidaridad y forjaremos una democracia sana y fuerte.

He terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas.*)

**Sr. Caballero.** — Pido la palabra.

He dicho que no tengo ánimo de polemizar en absoluto con los señores senadores, porque he expresado algunas ideas que de antemano sabía que iban a disonar en el ambiente del Senado y fuera de él, y que iban a ser, tal vez, recogidas por la inconciencia de algunos cronistas de diarios de circulación local y barata, para deformarlas. Pero ante las afirmaciones que ha hecho el señor senador y dado el concepto que me merece su ilustración y la sinceridad de sus convicciones, tengo que afirmar definitivamente algunos de esos conceptos que he expresado, porque ellos servirán para aclarar cuál ha sido mi propósito y hacer ciertas síntesis.

Yo he sostenido que el régimen de la propiedad privada viene del fondo de la historia, porque he encontrado que las legislaciones dadas a Esparta y Atenas por Licurgo y Solón consagran, desde luego, ese régimen de la propiedad privada como base de la existencia de las nacionalidades que iban a contribuir a formar.

He afirmado que el régimen de la propiedad privada existió durante el período de vida de la República Romana y que allí fué consagrado; que la solución que buscaron los reformadores agrarios en Roma se refería a la propiedad conquistada, al ager público, a la tierra pública, pero nunca a la propiedad privada que consagraba la legislación de la República. Cuando Augurello habló así, como dice el señor senador Palacios, en el siglo I al II, después de Cristo, se refirió seguramente, —a pesar de haberlo leído muchas veces, no recuerdo la forma de expresión de él—, asiento a lo que el señor senador afirma, pero es mi convicción de que se refirió a la propiedad en tiempos de los emperadores, porque el imperio sí asigna a la propiedad privada una función social, y repartía la propiedad privada entre las legiones, o entre los ciudadanos nuevamente incorporados a Roma.

El señor senador recordará cuál es el origen del conocimiento entre Virgilio y Augusto. Virgilio tenía una finca, una pequeña propiedad cerca del lago de Garda, donde había nacido. Se llama, por casualidad, el lugar Ande; cuando Augusto hizo el reparto entre sus legionarios de las propiedades privadas, una de las que se expropió para adjudicarla a terceros fué la de Virgilio; y, huyendo de los soldados que iban a tomar posesión de su hermosa propiedad, fué llevado ante Augusto y ahí entró en relación con él, y por Augusto tal vez se salvó la *Eneida*, porque el que lo introdujo era amigo de Cicerón. Hizo que le leyera ese poema y el emperador quedó encantado con él; pero no recuperó la propiedad Virgilio; quedó siendo un pobre paria en su país y fué a morir allá por Nápoles.

Afirmo, entonces, que la propiedad privada ha sido reconocida desde el fondo de la historia por todas las legislaciones básicas que han organizado Roma, que han organizado Grecia, que han organizado parte de Atenas y otra parte de Grecia, Esparta.

**Sr. Palacios.** — Por lo menos, admitirá el señor senador que todo ese reconocimiento a que se refiere, era un poco anterior a Lenín.

**Sr. Caballero.** — Cómo no, señor senador.

**Sr. Palacios.** — El señor senador decía que se había dictado por primera vez...

**Sr. Caballero.** — Le agradezco muchísimo el recuerdo porque este régimen de la propiedad privada fué poco a poco olvidándose desde la transformación de la misma en sus caracteres a la propiedad socializada, y las monarquías absolutas llegaron a establecer el régimen de la función social de la propiedad. La propiedad

desapareció en realidad con el régimen de las monarquías absolutas.

¿A qué viene la revolución, la democracia? Precisamente, una de las cosas que trajo la democracia como finalidad, y probablemente el principio más estable para la organización de las nuevas sociedades fué la consagración de este principio de la propiedad privada inviolable inherente a la personalidad humana, y por la cual, el individuo no podía ser privado de ella sino por causas de utilidad pública.

Yo nunca he negado que aun el derecho absoluto de la propiedad pudiera estar limitado por la misma ley en obsequio a la solidaridad social, porque una de las características de la democracia es precisamente ésa; no siempre el individualismo debía privar en sus derechos sobre las conveniencias sociales. Lo que se buscaba es lo que todavía no ha conseguido la democracia y que tardará en llegar mientras estemos con estas ideas confusas: hombres que sienten de tan distinta manera ante los problemas que se presentan. Lo que se quería llegar a conseguir con la organización democrática era un sistema social que, a la vez que fuera solidario, pudiera el individuo, dentro de él, desenvolver todas sus actividades en cualquier dirección de la vida.

Esta combinación del interés social y de la actividad individual, es la esencia de la democracia; de manera que yo me coloco, como los católicos, como los ultramontanos, como cualquiera de ideas más extremas de derecha, que se me quiera atribuir, dentro de los principios inmutables de la democracia, cuando sostengo que la propiedad privada no puede ser expropiada, porque es un contrasentido.

**Sr. Palacios.** — Pero está en contra del Código de Malinas.

**Sr. Caballero.** — No me interesa el Código de Malinas.

**Sr. Palacios.** — Entonces, sus ideas no son muy firmes. Es curioso que el señor senador hable así.

**Sr. Caballero.** — No me interesa que sea modificado el principio, sea por el Código de Malinas o por cualquier otro. Me refiero a lo que ha ocurrido a través de la historia en el desenvolvimiento de la verdadera democracia.

**Sr. Palacios.** — Pero se trata del concepto de función social aceptado por el Código de Malinas que como católico, el señor senador debe aceptar.

**Sr. Caballero.** — La idea que yo he expresado, es la que me parece que surge del estudio de estas cuestiones a través de la historia.

**Sr. Palacios.** — ¡Ah! Muy bien, si es así.

**Sr. Caballero.** — Eso es lo que me parece que le daría a la democracia, en estos momentos de la historia, uno de los principios básicos de su estabilidad.

Cualquier otro principio que empezara por disolver estas ideas tan serias, puede conducirnos a situaciones inesperadas para nosotros mismos.

Eso es lo que quería aclarar, señor senador.

**Sr. Presidente (Sánchez Sorondo).** — Si ningún señor senador hace uso de la palabra...

**Sr. Laurencena.** — Pido la palabra.

**Sr. Palacios.** — Podríamos pasar a un breve cuarto intermedio.

**Sr. Landaburu.** — Entiendo, que el señor senador por Entre Ríos, doctor Laurencena, iba a hacer uso de la palabra. Pero si el señor senador no se encuentra en condiciones de hacerlo ahora, podríamos pasar a un cuarto intermedio pues el miembro informante de la comisión se dispone a hacer uso de la palabra después que lo hayan hecho en general los señores senadores que han anunciado intervenir en el debate.

**Sr. Laurencena.** — Puedo empezar inmediatamente, o después de un breve cuarto intermedio, si así lo desean los señores senadores.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Sánchez Sorondo).** — Invito al Honorable Senado a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo la hora 17 y 45.

—Vueltos a sus asientos los señores senadores, y siendo la hora 18 y 5 dice el

**Sr. Presidente (Sánchez Sorondo).** — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Laurencena.** — Pocos proyectos han llegado al Congreso y han sido seguidos en su trámite con mayor interés y con mayor auspicio por la opinión pública unánime que éste. Es explicable porque el asunto es de trascendental importancia; es de importancia, y la ha tenido, tiene y tendrá siempre en todos los países, pero la tiene excepcional en los países de economía agraria como es el nuestro.

Este proyecto ha despertado ilusiones y esperanzas en la opinión pública, porque ha creído sinceramente que le ofrece la solución del problema de la propiedad de la tierra, que está tan íntimamente vinculado, en el sentir general, al progreso agrícola y a la prosperidad de los productores.

Es necesario, pues, una convicción firmísima y muy fundadas razones para adoptar una aptitud, como la que yo adopto en este momento, que pueda parecer de oposición al pensamiento de colonización en sí mismo.

Yo no cumpliría mi deber si no dijera en este instante todo mi pensamiento, aun a riesgo de ser mal interpretado. Pero, para evitar confusiones, desde ya debo manifestar que yo no soy contrario a todo pensamiento de colonización y lo he demostrado con el proyecto presentado a este mismo cuerpo en la sesión del 24 de septiembre de 1936, en el que proponía la colonización de las tierras que actualmente posee el Estado, las reparticiones autónomas del mismo y los bancos oficiales.

De manera que el propósito central de dar estabilidad al productor haciéndolo propietario, no tiene mi oposición, ni creo que pueda tener la disidencia de nadie. Son otras cuestiones seguramente las que nos van a dividir o separar con los sostenedores de este proyecto. ¿Es oportuna, en primer lugar, una ley general de colonización, adquiriendo tierras en la zona agrícola central del país? Creo que no es oportuno, e intentaré demostrarlo.

Yo pregunto, ante todo, si no es necesario, antes de abordar este problema de la colonización, resolver otros con carácter de previos, tales como el seguro agrícola, el crédito agrícola, mal y deficientemente resuelto con la creación del Sección de Crédito Agrícola en el Banco de la Nación; el fomento de la cooperación y sindicalización de los agricultores, mal resuelto, en una ley deficiente que no ha dado resultados no obstante sus muchos años de vigencia. ¿No es necesario resolver seriamente el problema de la comercialización y el problema de los transportes de la producción agrícola? ¿No es necesario estudiar una cosa que, aunque parece mentira, es exacta: las condiciones agrícolas de las distintas regiones del país, que todavía no conocemos con certeza?

Por último, ¿no sería previo aliviar las gabelas que pesan sobre los agricultores y, especialmente, esta nueva gabela llamada de «diferencias de cambio» que gravita permanentemente aun en la mejor época, con un 10 ó 15 % y ha llegado a gravitar en un 20 % sobre el valor de la producción agrícola?

Luego de estas cuestiones, antes de formular el proyecto de colonización, es necesario establecer con qué criterio y con qué fines inmediatos vamos a hacer la colonización. Primero: ¿Vamos a hacerla con los actuales agricultores e hijos de arrendatarios que tienen experiencia,

que han acumulado ya un pequeño capital? Parece que ése es el pensamiento de la comisión, aunque en ciertas partes no lo sigue con mucho rigor.

Segundo: ¿Debemos crear nuevos agricultores induciendo a convertirse en tales y hacer propietarios a los actuales obreros rurales y urbanos?

Tercero: ¿Vamos a estimular la inmigración agrícola, como ha dicho el señor ministro en su discurso?

Después de estos problemas, debemos encarar otros. ¿Vamos a adoptar el mismo criterio que parece que adopta este proyecto para todo el país, para la zona agrícola del litoral, para los territorios, para la zona del Oeste, para las provincias del Norte, que tienen condiciones completamente distintas?

¿Vamos a hacer o no en las regiones donde convenga, una colonización de fomento que requiere caracteres completamente especiales?

Finalmente ¿qué forma y tipos de explotaciones debemos fomentar y estimular? ¿Vamos a decidarnos por mantener el sistema de cultivo extensivo que muchos, inclusive economistas, creen que debemos todavía mantener, o vamos a ir al sistema del cultivo intensivo? ¿Vamos a intensificar las explotaciones mixtas agrícola-ganaderas, o vamos a hacer las explotaciones granjeras? ¿Debemos estimular también las explotaciones frutales o forestales o debemos por último, dedicarnos a los cultivos industriales?

Yo creo, señor presidente, que sin dilucidar a fondo, con intervención de especialistas entendidos, todas estas cuestiones, no debemos encarar una ley general de colonización. Pero, naturalmente, este concepto con respecto a la ley general de colonización, no debe detenernos para no colonizar de inmediato las tierras que el Estado posee.

Este proyecto, señor presidente, da la impresión, leyendo algunas de sus disposiciones, de que realmente va a producir una transformación importante en las condiciones de la industria agrícola. El artículo 1º lo sugiere. Dice: «Esta ley se propone poner en acción un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios.»

Y a renglón seguido, con una frase que ha sido tildada de revolucionaria, dice que «la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley, de acuerdo al interés colectivo».

Desgraciadamente, esta portada monumental no corresponde al contenido mismo de la ley, a su articulado. Es evidente que los autores de este proyecto se han inspirado en el concepto del valor social de la tierra, pero no han tenido el coraje de extraer de este principio todas sus consecuencias.

Yo no voy a detenerme en el estudio de la evolución histórica de este concepto del valor social de la tierra, porque lo ha hecho con una gran erudición el señor senador Palacios.

Quiero significar, que el concepto social de la tierra es un concepto antiquísimo y en este sentido, tal vez tenga razón el señor senador Caballero, cuando nos dijo que es un concepto comunista, porque el comunismo también es muy antiguo.

Yo recuerdo a este respecto, que el gran tribuno Castelar, calificado cierta vez de comunista, porque entonces también se estilaba esta forma de propaganda política, contestó: «No, la humanidad viene del comunismo y va hacia la libertad. Yo que soy un hombre del futuro no puedo ser comunista.»

Pero tal vez, más interesante que estas investigaciones históricas que nos han llevado a Grecia y a Roma, sea recordar algo que se ha olvidado en este debate, y que está concebido con más audacia que en el proyecto de la comisión. Me refiero a una ley argentina, antigua, poco conocida, como muchas cosas, por ser provincial.

Tengo un especial sentimiento de placer en poder traer a este debate ese antecedente, porque da la coincidencia de que se trata de una ley proyectada por mi padre como ministro de Gobierno del general Racedo, en Entre Ríos, el año 1885.

El proyecto, convertido en ley, decía lo siguiente: «Artículo 1º — Declárase de utilidad pública la expropiación de una legua cuadrada a cada costado de la vía del Ferrocarril Central Entrerriano para ser colonizada, en los puntos designados para las estaciones intermedias.»

Debo advertir que en ese momento se estaba construyendo el ferrocarril. La designación de las tierras era hecha por el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Departamento Topográfico.

Pero en el artículo 2º tiene esta ley una disposición, que es donde yo digo que avanza más que la ley que estamos discutiendo: «Designados por el Poder Ejecutivo los terrenos que de acuerdo con esta ley deban ser colonizados, notificará a los propietarios para que en el término de noventa días siguientes, manifiesten si optan por la colonización por su cuenta, o se someten a la expropiación.»

Y el 3º: «El propietario que opte por la colonización queda obligado a desocupar su campo de haciendas y subdividirlo en concesiones con arreglo a la ley nacional de colonización, y a costa del Poder Ejecutivo en el término de un año.»

Respecto al precio, que siempre ha sido materia de preocupaciones, el artículo 4º dice: «Los propietarios que, al vencimiento del término establecido por el artículo anterior, no hubiesen dado cumplimiento a lo que en el mismo se establece, quedarán sujetos a la expropiación, para lo que deberá tomarse por base el precio de la tierra en la época en que dicho término empezó a correr.»

Y como estímulo a los dueños de esas propiedades, el artículo 8º establece: «Cuando el dueño del terreno a expropiarse opte por la colonización, quedará exceptuado del pago de la contribución directa por el término de diez años.»

Como se ve, esta ley tiene un concepto que es realmente avanzado, porque adopta el principio de que el Estado puede, por razones de interés público, resolver y determinar el destino que las propiedades deben tener; y no aceptado por los propietarios ese destino, entra a funcionar el mecanismo de la expropiación, a cuyo efecto contiene también el principio de la declaración de utilidad pública.

He dicho, señor presidente, que este proyecto no es oportuno. Creo, quizá, poderlo demostrar con algunas de las razones que expuse cuando fundé ante esta Cámara el proyecto de colonización de las tierras del Estado, el año 1936, que voy a permitirme leer, con anuencia de la Honorable Cámara.

«He limitado, dije entonces, el proyecto a la colonización de las tierras que actualmente posee el Estado nacional y las reparticiones autónomas, de la zona agrícola del país, en lugar de proyectar un plan amplio y general de colonización, como lo reclama la opinión pública, por razones que estimo fundamentales.

«¿Es posible abordar actualmente el problema de la colonización aisladamente, desvinculándolo de los demás problemas o aspectos de la economía agraria, en general? ¿No será necesario resolver previamente los otros problemas o algunos de ellos, vinculados directamente a la estabilidad de las industrias rurales? Finalmente, ¿podría el Estado, en estos momentos, realizar una acción colonizadora eficaz, por su amplitud y por sus buenos resultados?

«Las contestaciones a estos interrogantes re-

sultan de la observación de los hechos y de fenómenos económicos fácilmente constatables.

«Durante la primera época de la expansión agrícola del país, la colonización, reducida a subdividir algunos latifundios y vender lotes de pequeña extensión a los agricultores, tuvo buen éxito y la mayoría de los adquirentes logro pagar la tierra. Así surgieron numerosos y prósperos centros agrícolas en todas las provincias del litoral y del centro, creados por la Nación, las provincias, empresas de colonización y particulares.

«En las últimas décadas la Nación paralizó, puede decirse, la acción colonizadora en la zona agrícola del litoral. Ella quedó a cargo del Banco Hipotecario Nacional, con los conocidos préstamos de colonización de las provincias que han formado algunas colonias, de las empresas de colonización y de los particulares.

«Durante este período un hecho aparece evidente: cada día es más difícil el pago de la tierra y, salvo excepciones, los contratos terminan con el abandono de la tierra por el colono.

«Si investigamos las causas de este cambio tan fundamental en las condiciones de la colonización, encontramos en primer lugar y con influencia preponderante, el precio de la tierra en relación con los resultados de la explotación agrícola.

«Si tomamos aisladamente y en cifras absolutas el precio de la tierra, en el primer período de expansión de la industria agrícola y en la última época, la diferencia aparece visible y comprobable estadísticamente. Por ejemplo, en Entre Ríos, la Nación y la provincia vendieron las tierras de las colonias Alvear, Yeruá, Algarrobitos, Avellaneda, etcétera, a precios que, con los intereses acumulados, no excedían de \$ 50 m/n. la hectárea. En las mismas zonas, desde principios del siglo, se inició una valorización que llevó el precio de las tierras en general, por encima de \$ 200 m/n. la hectárea y que en algunas regiones llegó a \$ 300 y 400 moneda nacional. Esta valorización excesiva de la tierra, consecuencia de una especulación imprudente y perjudicial, cuyas consecuencias estamos pagando todavía, explica por sí sola, sin necesidad de ahondar más en el análisis, el éxito de la colonización en sus comienzos, y sus malos resultados posteriores.

«El precio de la tierra no es el valor económico de la tierra. Pueden coincidir, y es, a mi juicio, lo que ocurrió en la primera etapa de la colonización, y de ahí que el colono podía pagar el precio de la tierra con su misma producción; pero cuando el precio de la tierra,

por efecto de la especulación, supera desmedidamente y sin relación su valor económico, que es lo que ha ocurrido después, aquél no puede pagarse con la producción.

«Sin embarcarnos en una disquisición doctrinaria, y buscando una fórmula simple, comprensible, sin dificultad y aproximativamente exacta, podemos decir que el valor económico de la tierra está determinado por la utilidad o beneficio que produce el trabajo racional de la misma. Deducimos, pues, lógicamente, que una tierra es de valor colonizable cuando esa utilidad o beneficio permite pagar el precio de venta en un cierto número de años, lo que sólo puede ocurrir cuando el precio coincide o se aproxima al valor económico.»

Más adelante, examinando los diversos factores que contribuyen a una explotación agrícola, decía: «Es indudable que los tres factores generales que he determinado: rendimientos agrícolas, valor de los productos y costo de la producción, han variado diversamente y en proporción diferente, en los dos períodos en que he dividido la colonización en el país. Dejo para los estadígrafos e investigadores, la tarea de traducir en cifras absolutas y relativas las variaciones que esos factores han sufrido y las relaciones exactas entre unos y otros, investigación que sería interesantísima y muy ilustrativa. Para mi objeto, me basta referirme a un hecho evidente y que no creo ofrecerá motivo de discusión: el costo de la producción se ha elevado paulatina y constantemente sin oscilaciones dignas de mención, mientras que los rendimientos agrícolas han permanecido casi estacionarios, o aumentando parcial y excepcionalmente en algunas zonas o para algunos cultivos, y el precio de los productos, aparte de estar sujeto a fluctuaciones rápidas e importantes, acusan un promedio normal y general más elevado, durante los últimos veinticinco años que durante el período anterior, pero sin ninguna proporción con el aumento del costo de la producción y sin compensación con el de los rendimientos. Se ha producido, pues, un desequilibrio que ha hecho desaparecer, o que ha reducido a un mínimo, el beneficio o utilidad de las explotaciones agrícolas y el balance general, a través de varios años, quizá dé un saldo negativo.»

Análizo después otras circunstancias y factores, vinculados también a los resultados de la explotación agrícola para terminar con esta observación: «Podría discutirse la influencia de estos factores y otros que omito considerar sobre la colonización, si un hecho incontrover-

tibles no se hubiera encargado de ponerla de manifiesto. La crisis económica, entre otras deplorables consecuencias, ha producido la ruina de muchos agricultores propietarios, que habían conseguido su independencia económica durante el primer período de la colonización. Numerosos agricultores que habían llegado a adquirir y pagar totalmente la tierra, la han perdido, imposibilitados de defenderla contra el cúmulo de circunstancias adversas, en un ambiente económico que les es hostil y que no les ofrece ningún amparo. Y muchos que no la han perdido aún, por la moratoria hipotecaria, ven acercarse con muy pocas esperanzas, el fin más o menos próximo de esa ley.»

Terminaba, señor presidente, con esta pregunta que es oportuno repetir: «¿Es posible que pensemos seriamente en una gran obra de colonización, en el preciso momento en que los agricultores propietarios están perdiendo las tierras que adquirieron y pagaron años atrás?»

Este interrogante queda todavía en pie.

En cambio, señor presidente, si no debemos encarar el problema de la colonización general, por las razones que he dado, repito que es inexcusable que el Estado no colonice las tierras que posee, y las tierras que poseen las reparticiones autónomas y bancos oficiales.

¿Qué cantidad de tierras aptas para ese objeto posee el Estado?

Según el miembro informante de la comisión, de acuerdo con la información que ella ha recibido, el Estado posee actualmente las siguientes extensiones de tierra: la Dirección de Tierras, según informes de la misma, refiriéndose únicamente a las tierras aptas para la colonización, posee 1.628.345 hectáreas. El Banco de la Nación poseía 905.058 hectáreas.

**Sr. Landaburu.** — Deseo aclararle al señor senador que en la actualidad no posee ninguna extensión de tierra colonizable, porque las ha liquidado todas.

**Sr. Laurencena.** — El Banco Hipotecario Nacional poseía 481.702; el Consejo Nacional de Educación, 117.260 y el Instituto Movilizador, 1.046.423, lo que hace un total de 4.178.788 hectáreas.

El señor miembro informante de la comisión observa, seguramente con acierto y con exactitud, que, de las tierras que posea el Banco de la Nación, el Banco Hipotecario Nacional, el Consejo Nacional de Educación y el Instituto Movilizador, no todas eran aptas para colonización, y ha calculado, probablemente con los informes de esos establecimientos, que única-

mente la tercera parte era colonizable. Hecho el cálculo, tomando la tercera parte de lo que poseen esos establecimientos y lo que la Dirección de Tierras declara aptas para colonización, el Estado poseería 2.478.345 hectáreas colonizables. Es indudable que la colonización de 2.400.000 hectáreas y de mucho menos, aunque no fueran más de un millón y medio, es una tarea que basta para absorber durante muchos años las actividades de un organismo como el que se proyecta.

Esto tendría otra consecuencia: la de hacer que alguna vez, como he de tener ocasión de repetirlo, el Estado deje de ser el latifundista más grande y el peor propietario del país.

Pero para estudiar este asunto a fondo, es necesario contemplar algunos aspectos relacionados con la industria agrícola nacional, porque es posible que algunos de ellos nos lleven a consecuencias sorprendentes.

Debemos estudiar, ante todo, la forma como se ha desarrollado y ha evolucionado la agricultura nacional, tarea que la podemos hacer, felizmente, debido a los datos que nos proporciona el censo de 1937. Desgraciadamente este censo es deficiente en muchos aspectos, como lo haré notar. Es lamentable que en este censo no se hagan estudios comparativos, sino en forma muy limitada, con otros censos anteriores, y no se consignen datos tan interesantes como las explotaciones mixtas agricolaganaderas, como las explotaciones granjeras anexas a las explotaciones de chacra y como las explotaciones de huerta, anexas, también, a las de chacra, datos que son interesantísimos, porque son los únicos que realmente pueden darnos a conocer cuál es el estado real de la agricultura del país y la situación económica del productor.

El censo nos demuestra que el crecimiento de la agricultura del país se opera en la siguiente forma: el año 1895, habían 4.892.000 hectáreas cultivadas, el año 1908, trece años después, existían 19.078.900 hectáreas cultivadas, lo que hace un aumento de 14.000.000, en cifras redondas, en trece años, o sea un aumento de más de 1.000.000 de hectáreas por año.

Desde el año 1908 al año 1914, en seis años, la extensión sembrada llega a 24.586.600, con un aumento de 5.507.700 hectáreas. Es decir, muy poco menos de un millón por año.

Y, finalmente, señor presidente, entre el año 1914 y 1937, en que se realiza el censo, el aumento es de 3.529.700 hectáreas, llegando la extensión sembrada, en total, a 28.116.300 hectáreas. Quiere decir, que en los veintidós años comprendidos entre el año 1914 y el año 1936-



1937, el aumento es apenas de 3.000.000 de hectáreas, rompiéndose el ritmo de crecimiento que revelan las cifras anteriores.

Es interesante observar que esta detención, en el desarrollo y crecimiento de la industria agrícola del país, coincide con las dos épocas que yo he marcado como de prosperidad y de depresión o de crisis, siendo de notar que he hecho esa división por observación objetiva, antes de conocer las cifras del censo.

Pero es muy interesante, señor presidente, observar cómo se produce este crecimiento durante el último período de crisis, que es lo que nos interesa observar, desde el año 1914. El trigo aumenta 1.191.100 hectáreas; el maíz, aumenta 2.128.000 hectáreas; el lino, aumenta 1.723.000 hectáreas. En cambio, las forrajeras disminuyen 1.943.000 hectáreas, y los demás cultivos también disminuyen, y así se explica que en el conjunto no haya un aumento sino de 3.529.700, cuando aquellos tres cultivos representan un aumento de más de 5.000.000 de hectáreas.

Todas estas cifras, tomadas así, en forma global, para todo el país, no nos dicen, señor presidente, la realidad de la evolución que se ha operado en las distintas regiones, que es muy interesante observar.

Por ejemplo, los datos por provincias y territorios nos dan estos resultados: la provincia de Buenos Aires aumenta sus cultivos de 9193.000 hectáreas a 11.127.000, es decir, un aumento de 1.934.000 que representa el 20 %; Córdoba, de 5.394.000 hectáreas a 6.742.000, con un aumento del 25 %; Entre Ríos, de 1.193.000 llega a 1.711.000, con un aumento de casi el 50 %; Tucumán, de 179.000 a 249.000, con un aumento del 40 %; Santiago del Estero, de 236.000 a 243.000, con un aumento de 7.000, que es apenas del 3 por ciento.

En cuanto a los territorios nacionales, el de Chaco, pasa de 21.000 hectáreas a 423.000, con un aumento de veinte veces la extensión que tenía sembrada el año 1914; La Pampa, aumenta en una pequeña proporción de 47.000 hectáreas; Misiones, aumenta 111.000 sobre 33.000 que tenía antes. Y en todo el resto del país disminuye la extensión sembrada, y en algunas partes, en una forma que es realmente digna de preocupación y cuya importancia vamos a ver cuando la relacionemos con otras estadísticas.

Catamarca tenía el año 1914, 76.000 hectáreas y el año 1937 baja a 31.000, con una reducción de más del 50 %; Corrientes, de 305.000 baja a 162.000, un poco menos del 50 %; Jujuy,

de 75.000 baja a 40.000, también algo menos del 50 %; La Rioja, de 96.000 baja a 22.000, con una reducción del 70 %; Mendoza, de 306.000 baja a 208.000, con una reducción del 30 %; Salta, de 147.000 baja a 119.000, con una reducción del 15 %; San Juan, de 173.000 baja a 77.000, con una reducción del 60 %; San Luis, de 594.000 baja a 266.000, con una reducción del 70 %; Santa Fe, de 4.585.000, baja a 4.542.000, con una pequeña reducción de 43.000 hectáreas, que apenas representa el 1 por ciento.

Creo, señor presidente, que estos datos son sumamente ilustrativos. Desgraciadamente, el censo, en la parte en que expone la relación de los resultados del mismo con los censos anteriores, no nos permite inducir en qué clase de cultivos se ha producido la reducción tan extraordinaria que aparece en algunas provincias, y los pocos datos que se dan al respecto son contradictorios, porque, por ejemplo, el mismo censo nos dice que provincias que aparecen con enormes reducciones en el conjunto de las extensiones sembradas, como Catamarca, por ejemplo, aumenta sin embargo, sus sementeras de trigo. La Rioja, aunque en pequeña escala, aumenta sus sementeras de trigo; Mendoza, que también tiene una fuerte reducción, también las aumenta, lo mismo que Salta, San Juan, Tucumán y Jujuy, es decir, que aparecen con fuertes reducciones en conjunto, habiendo, no obstante, un mayor cultivo de trigo.

El censo no nos dice, insisto, en qué cultivos, en qué clase de explotaciones es que se han producido estas enormes reducciones, del 30, 50 y hasta del 70 por ciento.

**Sr. Landaburu.** — ¿Me permite, señor senador?

Es cierto que el censo no enuncia el motivo de esa disminución de los cultivos, pero las causas que han mediado en algunas provincias son conocidas. En San Luis, por ejemplo, la reducción de la extensión de alfalfa, que de cerca de 400.000 hectáreas en 1914 pasó a 70.000, según nos lo dice el último censo, responde principalmente a la sequía y a la misma causa responde la disminución en otras provincias argentinas.

**Sr. Laurencena.** — Es satisfactorio que con respecto a algunas provincias podamos los senadores informar sobre las causas que hayan podido producir esta situación; pero es lamentable, de todas maneras, que, habiéndose hecho una operación tan costosa, como es el censo agropecuario, en el que se cifraban tantas esperanzas, no nos dé una información completa para saber cómo ha evolucionado en el sentido del aumento o de la reducción cada sementera,

cosa que nos permitiría hacer un juicio con respecto a cuáles son las causas que están gravitando.

**Sr. Landaburu.** — La interrupción que me ha permitido el señor senador, sirve para demostrar que esa disminución de los cultivos, no acusa un abandono de los agricultores para esa clase de actividades, sino que responde a otros motivos, aunque no de orden general, sino a causas locales y conocidas.

**Sr. Laurencena.** — Yo no suponía que fuera un abandono de los agricultores, pero hay otras estadísticas, a las que me referiré después, que me hacen suponer que hay otras causas de carácter general, pues, como podrán notar los señores senadores, cuando las haga conocer, hay algunas contradicciones, por lo menos, aparentes, que no podremos aclarar mientras no se nos dé una información más completa.

Pero, mientras vemos la lentitud con que en el conjunto del país aumentan los cultivos, como el del trigo, y en algunas regiones se reducen, las estadísticas nos dan una información muy interesante respecto al desarrollo de los cultivos industriales.

Desgraciadamente, las cifras comparativas de estos cultivos con las de años anteriores no son completas, ni se refieren a los mismos años, pero, de todas maneras, nos dan algunas informaciones interesantes.

El algodón, por ejemplo, que empieza a cultivarse en el país recién en los años 1917/18, con 11.775 hectáreas, llega en el año 1937, a 375.460 hectáreas, es decir, que ha aumentado 35 veces. Esta es la explicación del enorme aumento que aparece en la extensión sembrada en el Chaco.

La caña de azúcar en 1914, 109.291 hectáreas; el año 1937, 187.702, con un aumento del 70 por ciento.

El girasol que aparece como cultivo en 1914 y figura en 1924 como elaborado para la fabricación de aceite, recién figura en la estadística de 1933 con 56.000 hectáreas, para llegar el año 1937, 4 años después, a 206.762 hectáreas, es decir, que ha aumentado en 4 veces.

El maní, de 6.794 hectáreas el año 1888, según el censo, de acuerdo a la primera estadística conocida de este cultivo, llega a 13.475 en 1914 y a 127.000 en 1937, aumentando en 10 veces, en este tiempo.

El tártago, por último, de 1.070 en 1914, llega a 21.237 hectáreas en 1937 y para hacer contraste con todo esto encontramos que el tabaco no prospera en el país.

En el año 1934 se llega hasta 21.000 hectáreas, para reducirse en 1937 a 10.919. Yo no sé si ésta será la consecuencia de la acción de fomento de Impuestos Internos. Es muy posible que Impuestos Internos haya entrado a proteger la industria del tabaco, y como consecuencia de ello se está reduciendo.

Por último, la estadística nos da cifras muy interesantes, aunque por desgracia no comparativas con los años anteriores, con respecto a dos formas de explotación; hortalizas y legumbres, que llega en el país a doscientas y tantas mil hectáreas y aunque, como he dicho, no hay cifras comparativas, es evidente, porque es de conocimiento general, que ha habido un sensible aumento.

Y por último, la explotación de frutales, de lo que tampoco el censo nos da cifras comparativas, ni en cuanto a la extensión sembrada ni al número de plantaciones, con relación a años anteriores. Pero nos da una estadística valiosa respecto a la exportación de frutas, sumamente ilustrativa. Por ejemplo, el cuadro respectivo nos dice que la exportación de duraznos mantiene la línea más constante de ascenso, casi sin fluctuación desde el año 1928, con 165.060 kilos hasta 470.000 que llega en el año 1937.

En manzanas, durante una serie de años, mantiene una exportación que fluctúa alrededor de 200.000 kilos anuales hasta 1934 y desde ese año la exportación es la siguiente: 1935, 1.498.000 kilos; 1936, 4.023.000 kilos; 1937, 5.413.000 kilos, es decir, un aumento extraordinario en pocos años.

Lo mismo ocurre con la exportación de peras que se mantiene hasta el año 1931, en un volumen que oscila entre los 150 y 350.000 kilos, para aumentar rápidamente en esta proporción, durante los años 1932 a 1937: 1.424.000, 1.692.000, 4.143.000, 9.521.000, 12.550.000.

Yo lamento molestar al Senado con esta información tan prolija, pero creo que puede ser útil, sobre todo a propósito de la demostración que intento.

La exportación de uvas tiene también un crecimiento rápido: el año 1928, 4.000.000; el año 1931, 6.000.000; el año 1937, 8.900.000.

En cambio otros cultivos y otras producciones frutales que creíamos nosotros que constituían un artículo muy importante de exportación del país, como naranjas y mandarinas, tienen disminuciones extraordinarias y están también, aparentemente, en decadencia.

Ahora, ¿qué nos indican, señor presidente, según podemos presumir, esta serie de estadísticas?

A mi juicio, als conclusiones a que debemos llegar son las siguientes: que existe una detención en el desarrollo agrícola del país, en general, y una manifiesta crisis en la agricultura de los grandes cultivos de trigo, maíz y lino: que en algunas regiones del país existe un retroceso manifiesto, como lo demuestran las cifras que he mencionado; y en tercer lugar, que es evidente, también, una evolución de la agricultura hacia las formas de cultivos industriales, de huerta y de frutales. Las cifras me parece que son sumamente elocuentes.

Desgraciadamente, no podemos completar este cuadro, por falta de información estadística con otro rubro que sería esencial para determinar la situación del agricultor, como ya he mencionado antes, que es la falta de datos relacionados con las explotaciones granjeras anexas. Sobre este punto hay una omisión absoluta en el censo, omisión que es lamentable porque no hay duda alguna de que la base más esencial y primera de la prosperidad del colono, está en la explotación de las industrias de granja anexas a la agricultura. Yo me atrevo a afirmar que tiene más importancia la explotación granjera anexa que la propiedad de la tierra.

Estudiada la forma cómo se ha desarrollado la agricultura en el país y su detención en los últimos años, conviene estudiar la forma como se hacen las explotaciones agrícolas en el país, lo que el censo de 1937 llama el «régimen de las explotaciones».

El censo nos da una información bastante completa en la forma cómo se realizaban las explotaciones agrícolas en el país el año 1937. Digo que es bastante completa, aunque debo agregar que en algunos rubros es deficiente y posiblemente induce a confusiones y errores; pero en líneas generales, como digo, la información es buena. Pero debo lamentar nuevamente que el censo en esta parte no nos haya dado ninguna cifra ni referencia, o decir que no era posible conseguirlas, para comparar las formas de explotación del año 1937, con relación a las formas de explotaciones de años anteriores o de otras épocas, en que existen estadísticas o censos. De manera que tenemos una buena fotografía del año 1937, pero ignoramos la evolución que este aspecto del asunto ha seguido. No podemos, entonces, decir si hemos progresado, si hemos retrocedido o si hemos quedado estacionarios. Y la verdad es que si no sabemos esto respecto a las formas de explotaciones, sabemos muy poco en materia de problemas agrarios, y especialmente de las cuestiones relacionadas con la colonización.

**Sr. Landaburu.** — ¿Me permite, señor senador?

Como el señor senador ha hablado en forma extensa, y deseo escucharlo con todo interés para contestarle debidamente, haría indicación de pasar a cuarto intermedio hasta mañana.

**Sr. Laurencena.** — Yo le pediría al señor senador me permitiera terminar este punto, porque quiero vincularlo con el que acabo de mencionar, para establecer algunas conclusiones.

**Sr. Landaburu.** — ¡Cómo no!

**Sr. Laurencena.** — El censo divide las explotaciones rurales, según sus formas, en tres partes: propietarios, arrendatarios, y un rubro titulado «Otras formas de explotación». Esta es la parte que yo noto deficiente, que puede inducir en confusiones muy graves, porque bajo «otras formas» el censo agrupa categorías tan dispares, desde el punto de vista económico y jurídico, como ocupantes, contratistas y puesteros. Y la verdad es que no sabemos con seguridad, porque ni siquiera eso ha explicado el censo, qué entiende por explotación por contratistas. Pero pareciera que la explotación por contratistas es una explotación hecha por el propietario de la tierra que contrata los trabajos de arada, siembra, etcétera. La explotación por puesteros, por lo que conocemos nosotros del campo, es lo mismo: es hecha por el dueño de la tierra que ocupa peones. Y en cambio, no sabemos por ejemplo, en qué categoría del censo se ha incluido el contrato tan común de aparcería y el de sociedad.

De manera que a pesar de estas deficiencias, tomamos para hacer estos cálculos, las cifras del censo, con algunas aclaraciones que en algunas partes es posible hacer.

La tercera categoría de «ocupantes, contratistas o puesteros», aparece con cifras desmesuradas en los territorios nacionales. En Los Andes tenemos el 99,8 % trabajada por ocupantes. Yo creo que no deben haber muchos contratistas; casi todos son ocupantes. En Neuquén, 79,6 %; en Formosa, 79 %; en el Chaco, 63 %; en Misiones, 61 %; en Río Negro, 53 %; en Chubut, 51 %; y solamente en dos provincias este porcentaje es elevado: en Santiago del Estero el 35 % y en La Rioja el 32 %, siendo de notar la circunstancias de que, según mis informaciones, Santiago del Estero es una de las pocas provincias que conserva mucha tierra fiscal, y en La Rioja existe el problema de las mercedes reales, de las que hemos oído hablar varias veces en el Senado, es decir, señor presidente, tierras mal administradas. De donde

Julio 16 de 1940

CAMARA DE SENADORES

16ª Reun. Cont. de la 12ª Sesión Ord.

resulta que el Estado argentino es el peor propietario que hay en el país; ni siquiera se preocupa de arrendar su tierra; están casi totalmente trabajadas por ocupantes.

Pero vamos al rubro que más interesa en este punto: según la clasificación del censo, existen 452.107 explotaciones, que se dividen de esta manera: propietarios 171.142, con un 37,9 por ciento, arrendatarios 200.318 con un 44 % y «otras formas» 80.547 con el 17,08 por ciento. Se nos ha habituado, señor presidente, a considerar que esta clasificación es de suma importancia para apreciar el estado de la agricultura y la prosperidad de las distintas regiones. Esto nos induce a pensar, —a cualquier hombre de la calle a quien se lo preguntáramos lo diría— que con toda seguridad, donde hay más propietarios es donde hay más prosperidad.

Los hechos, sin embargo, parecen decir lo contrario; la zona agrícola que tiene menos productores propietarios, es la provincia de Buenos Aires con el 30,09 %; sigue Santa Fe con el 32,04 %; Entre Ríos con 42,5 %; Córdoba con 44 %. La Pampa tiene el 27,7 por ciento. Pero en cambio, encontramos, por ejemplo, que en Tucumán los productores propietarios llegan al 74 %, en San Juan el 64 %, en Catamarca el 63 %, en San Luis el 61 % y en La Rioja el 61 por ciento.

La verdad es que todo esto desconcierta un poco, al ver que las provincias —y en este caso especialmente me quiero referir a Catamarca y La Rioja—, que notoriamente son las más pobres, y las que pasan, según se ha dicho aquí, por una situación económica difícil, son de las que tienen el mayor número de productores propietarios, mayor aún que las zonas más ricas y prósperas del país.

Bien, señor presidente, pareciera que no hay una vinculación tan estrecha entre la propiedad de la tierra y la prosperidad, o bien en aquellas provincias la propiedad de la tierra, en vez de ser un motivo de riqueza, es un cepo que ata a los hombres y los tiene sujetos a ella. Pero es interesante de todas maneras este dato, porque esto demuestra precisamente, aunque parezca lo contrario, el valor de la propiedad, el valor psicológico que tiene para el hombre, el sentimiento de la propiedad, porque de La Rioja y Catamarca, los únicos que no se van son los que están atados a un pedazo de tierra.

**Sr. Caballero.** — Si me permite el señor senador, otra deducción que podría sacarse de ello, es que los arrendatarios, como ocurre en Santa Fe, en general están mejor que los propietarios. (Risas.)

**Sr. Laurencena.** — Yo no me atrevería a sacar esa conclusión.

**Sr. Caballero.** — Sin embargo, es así, señor senador.

**Sr. Laurencena.** — No me atrevería, repito, a sacar esa conclusión, porque también el censo nos da datos que sugieren algunas dudas. Yo, por ejemplo, cuando encuentro que hay provincias en las que no obstante su prosperidad, el 50 % de sus contratos son a más del 50 de la producción, yo tengo, mientras no se me pruebe lo contrario, motivos para no quedar convencido de que esa gente está en tan buena situación, como cree el señor senador.

**Sr. Landaburu.** — La alta proporción de propietarios en esas dos provincias indica, entre otras conclusiones seguras, que se trata de tierras poco aptas para la colonización, de manera que el argumento no puede referirse a las tierras a que principalmente se refiere el despacho.

**Sr. Laurencena.** — Tal vez no, señor senador, porque yo le recuerdo que antes he leído, una estadística según la cual en esas provincias, con tan altos porcentajes de propietarios, la agricultura ha retrocedido en proporciones equivalentes al 50, 60 ó 70 por ciento, lo que quiere decir que antes esas tierras se cultivaban.

**Sr. Landaburu.** — Ha retrocedido por motivos climáticos, que hacen que las tierras no sean principalmente aptas y no llenen las condiciones que exige el despacho, entre las cuales está una determinada precipitación pluvial.

**Sr. Laurencena.** — Convengamos en que es un asunto digno de estudio.

Señor presidente: aun los datos que hemos dado así, por provincias, 30 %, Buenos Aires 44 %, Córdoba, Santa Fe, 32 %, Entre Ríos 42 %, no nos dicen ni nos pintan la realidad de la agricultura de estas provincias, porque dentro de cada una de ellas pasa el mismo fenómeno que hemos observado en el país.

No quiero fatigar excesivamente a los señores senadores, pero voy a hacer notar algunos datos.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene un porcentaje general de 30,9 % de propietarios, encontramos, sin embargo, distritos como Las Conchas, donde llega a 63 % el número de propietarios y San Fernando, al 73 %; pero, en cambio, hay partidos como Tornquist, con el 18 %, Tandil con el 15 %, Marcelino Ugarte, con el 20 % y Pergamino, señores senadores, con el 18 %. El fenómeno se reproduce en Córdoba, donde tenemos departamentos como Cruz del Eje, con el 69 %, Río Primero, con el 57 %, Río Seco, con el 59 %, San Javier, con el 81 %; en cambio, está el partido de General

Roca, con el 28 %, Juárez Celman, con el 23 % y Río Cuarto con el 33 %. El mismo fenómeno se presenta en Entre Ríos, aunque con menos oscilaciones, porque el porcentaje de la propiedad allí es más uniforme, oscilando sólo entre el 40 y 50 %. En Santa Fe las oscilaciones son algo más pronunciadas, porque tenemos el departamento de Castellanos, en que llega al 53 %, pero, en cambio, tenemos Rosario con apenas el 29 por ciento.

**Sr. Caballero.** — Sabrá el señor senador que hay muchos arrendatarios que no quieren ser propietarios.

**Sr. Laurencena.** — Había un italiano en mi provincia que decía: Para tierra basta con dos metros por uno.

Voy a tratar de llegar a una conclusión, señor presidente, aunque la información estadística ofrezca muchas dificultades para hacerlo. Quizá la única conclusión cierta, es que no podemos vincular como una fórmula inflexible el concepto de la propiedad con el de la prosperidad de la agricultura.

**Sr. Presidente** (Sánchez Sorondo). — Habiendo quedado la Cámara sin quórum, queda levantada la sesión.

—Era la hora 19 y 20.

RAMÓN COLUMBA.  
Director de Taquígrafos